

La sociedad chilena posdictatorial Entre la modernización y el imaginario democrático

Jorge Rojas Hernández

Nota: Este artículo ha sido elaborado en septiembre de 1999, o sea con anterioridad a las elecciones presidenciales chilenas de diciembre y enero del 2000.

Chile ha progresado significativamente en los últimos 10 años en sus índices macroeconómicos. Según la tabla de Desarrollo Humano del PNUD, con su puesto 34 se coloca a la cabeza de los países latinoamericanos. Sin embargo, la modernización puesta en marcha muestra serios déficits en el plano de la educación, salud, vivienda, medio ambiente, calidad del trabajo, participación ciudadana, seguridad y distribución del ingreso. Solo la profundización de la democracia y la realización de importantes reformas sociales podrán satisfacer las crecientes demandas ciudadanas por acceder a una mejor calidad de vida, exigida por una sociedad que quiere entrar al próximo milenio con mayor sustentabilidad económica, social y ambiental.

Transcurridos casi 10 años de transición a la vida democrática, resulta necesario un balance crítico sobre el estado en que se encuentran las instituciones y la sociedad chilenas. Dos gobiernos de la Concertación, con énfasis programáticos y estilos diferentes, han generado expectativas y desencantos. Las expectativas, luego de 17 años de negación de la democracia, la justicia y la libertad individual, eran por cierto muy altas y diversas. Se expresaban simbólicamente en el eslogan de la época «la alegría ya viene». A pesar de los indiscutibles avances económicos y en cuanto a la superación de la pobreza, la alegría aún no ha tocado suelo chileno.

El malestar es un síntoma generalizado de las tensiones e insatisfacciones que acompañan la vida cotidiana de la población. El descontento ha aumentado en los

últimos años, sobre todo por la desigual distribución del ingreso nacional y la falta de oportunidades reales de acceso a la buena educación, salud, vivienda, cultura, recreación, y en general al progreso que experimenta el país. El impacto negativo que ha sufrido la economía chilena producto de la llamada crisis asiática profundizó este descontento.

Los gobiernos de la Concertación han puesto el acento en diferentes aspectos de la realidad nacional. Patricio Aylwin centró sus políticas especialmente en la reconciliación nacional y en la disminución de los enormes índices de pobreza existentes a fines de la década de los 80; mientras la gestión de Eduardo Frei dio relevancia al proceso de modernización de la economía, la infraestructura, la inserción internacional, así como a reducir la pobreza. Los resultados de ambos gobiernos han sido desiguales. Por ejemplo la reconciliación nacional aún no se ha producido, aunque la detención de Pinochet en Londres generó una dinámica positiva en el país en torno de los problemas de violación de los derechos humanos. La miseria ha disminuido ostensiblemente, aunque sus índices se han estancado en los dos últimos años. Importantes ámbitos de la vida nacional y regional no han avanzado, acumulándose desproporcionalidades, atraso e inequidad. Esta situación coloca al país frente a la necesidad de cambios. Tan cierto es ello que los principales aspirantes a reemplazar a Frei en La Moneda, el socialista Ricardo Lagos, por la Concertación, y el conservador Joaquín Lavín, por el Pacto por Chile, se refieren –por cierto con puntos de vista muy diferentes– a la necesidad de transformaciones. Incluso Lavín participó en una agotadora «caminata por el cambio», pero su discurso se reduce a los pequeños y no a los grandes cambios que requiere y reclama el país.

Crisis económica

La crisis económica de 1999 ha golpeado con fuerza no tanto a los grupos económicos sino a los sectores medios y bajos, social y legalmente desprotegidos, develando así las debilidades estructurales del modelo de desarrollo y de los discursos exitistas que la clase política y empresarial acostumbraban exhibir en foros internacionales y salones de venta. La sobreestima y soberbia se transformaron rápida e inesperadamente en pesimismo e inacción. Lejos de convertir la crisis en oportunidad para crecer –como recomendaban Gobierno y analistas– se utilizó para despedir trabajadores y rebajar salarios, sembrando nuevas incertidumbres entre los ya inseguros «privilegiados» del mundo del trabajo. En efecto, la desocupación alcanzó a fines de julio de 1999 un 11,1%, afectando a 642.730 personas (INE), con lo que superó las tasas existentes en 1998

(9,5%), dejando atrás los enormes avances experimentados a mediados de la década de los 90, cuando la desocupación se estabilizó entre 6 y 7% (OIT). La falta de trabajo afecta especialmente a los jóvenes, arrojando un índice de 33,1% entre los 15 y 19 años, y de 21,4% entre 20 y 24 años (INE). A ello se agrega el hecho de que la crisis sorprende a los desocupados sin un seguro de cesantía que ayude a paliar en parte la dramática situación económica y social.

La pérdida del trabajo o la rebaja salarial coloca a los involucrados en situaciones difíciles. Es el momento en que las obligaciones contraídas se hacen patentes y las agencias de cobradores entran en acción presionando a los ciudadanos deudores, embargando y retirando los pocos bienes valiosos que tienen en su poder (televisores, juegos de living, electrodomésticos, autos, etc.). Aparecen las listas negras de los deudores y, con ello, el estigma social con graves consecuencias laborales. Sectores medios se ven obligados a retirar a sus niños de colegios privados caros o deben mudarse a viviendas más modestas o volver a vivir con sus padres para capear el temporal económico. Las deudas se acrecientan aún más en las negociaciones con los usureros y esta vez las numerosas tarjetas de crédito empiezan a pesar en los bolsillos, acrecentando las dudas sobre el sistema de intercambio imperante. Las depresiones –con diferentes perfiles– entran en el escenario reclamando la presencia de los psicólogos. El temor de caer en la pobreza o de empobrecerse más, de no saber cómo sostenerse y sostener a una familia produce angustia y pánico en la población. El pesimismo se expande como una enfermedad por el cuerpo social y con ello se desvanece para muchos la esperanza de ingresar a la sociedad de consumo. El síndrome del malestar económico se apodera de la sociedad, introduciendo problemas de legitimidad y desconfianza en el sistema. La estabilidad genera confianza, adhesión e integración, mientras que las crisis ponen al descubierto las debilidades de un modelo de desarrollo y abren perspectivas de cambio. Se cuestiona el papel de los empresarios, que aprovechan la crisis para despedir trabajadores en forma masiva, mientras que la crisis económica muestra a un empresariado sin responsabilidad social y con poca capacidad emprendedora, dejando el espacio libre para la iniciativa y ofensiva del capital internacional, que sigue comprando empresas. Emblemático es el caso de la adquisición de la estratégica empresa chilena de energía Endesa por parte de Endesa España.

Signos equívocos de la modernización

El proceso de modernización puesto en marcha en Chile solo ha considerado determinados aspectos, dejando a otros, importantes, excluidos o pendientes. Entre éstos se encuentran los problemas de equidad, la descentralización y

regionalización, la modernización del Estado, de la educación, la salud, el respeto al medio ambiente, la reforma del sistema político y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Todos estos temas son esenciales para avanzar en la consolidación de la democracia y sacar al país del subdesarrollo, eliminando la pobreza y otorgando igualdad de oportunidades para progresar y mejorar la calidad de vida de la mayoría. La estrategia neoliberal ha materializado violentamente una nueva fase de modernización, pretendiendo superar la crisis global experimentada en la anterior, provocada sobre todo por la presión creciente de los sectores populares por entrar al progreso, aspirando a ejercer –con razón– los mismos derechos de los ya integrados y beneficiados por el avance social. En el pasado, el Estado, los partidos populares y los movimientos sociales trataron de superar la marginalidad y desigualdad social redistribuyendo y fortaleciendo el ámbito de lo público (educación, salud, infraestructura, equipamiento social, etc.); impulsando reformas agrarias; alfabetizando y ampliando y extendiendo el sistema educacional, en fin, profundizando la democracia. La primera modernización industrialista se tradujo en un desarrollo del mercado interno, una mayor distribución del progreso y una ampliación significativa de los derechos.

La segunda modernización es exógena, privilegia el mercado y el consumo. El nuevo paradigma es el consumo, lo que no requiere mucha democracia ni participación ciudadana. Según Tironi (p. 227), Chile se habría transformado en la década de los 90 «en una sociedad de consumo», siendo el consumidor el protagonista principal. No obstante los problemas de subdesarrollo, sostiene, la sociedad chilena estaría experimentando signos «típicos de la abundancia: deterioro del medio ambiente, destrucción de las comunidades locales, deseos de arrancar de la vida urbana, etc.» (p. 40).

Hay que cuidar el medio ambiente, pero ¿al costo de detener el crecimiento económico? Hay que mejorar las condiciones de trabajo, pero ¿al costo de inhibir la expansión del empleo? Hay que atender el estrés que el mercado produce en las personas, pero ¿incluso al costo de restringirles sus posibilidades de elegir y consumir? Hay que preocuparse del endeudamiento excesivo, pero ¿al costo de revertir una democratización sustantiva, como es la masificación del acceso al crédito? Hay que atacar la congestión de las ciudades, pero ¿aun al costo de hacer del automóvil nuevamente el privilegio de unos pocos? Hay que enfrentar urgentemente la contaminación del aire de Santiago, pero ¿aun al costo de expulsar a su población encareciendo la vida en la capital? Hay que preservar el sentido de comunidad, pero ¿aun al costo de satanizar el individualismo, que está en la base misma del capitalismo? (p. 210).

Para el autor el malestar existiría en las elites y en los grupos superiores y medios-altos que verían amenazados sus privilegios por la irrupción de las «masas consumidoras». En otras palabras, el mercado haría posible la emancipación de los individuos, los consumidores, masas armadas con tarjetas de crédito, estragadas por largas jornadas y precarios trabajos, sin derechos ni salud, inseguros e infelices según el PNUD; santiaguinos intoxicados, campesinos fumigados y ciudadanos crecientemente deprimidos, se transformarían por obra del mercado en una nueva clase «revolucionaria», capaz de poner en jaque el poder de los privilegiados. Tiene razón Tironi al advertir sobre la irrupción de las masas ávidas de consumismo, lo que significaría un cambio en el patrón cultural de la sociedad chilena. Sin embargo, otra cosa sería repetir la consabida consigna de décadas pasadas, en el sentido de que la modernización tiene un costo social, que se manifestaría en desestructuración y desorganización social, destrucción de la comunidad, deterioro del medio ambiente, contaminación, caos urbano, desregulación de las relaciones laborales, aumento de la incertidumbre y del estrés, etc. Numerosos estudios y encuentros ambientales de Naciones Unidas –incluida por cierto la entrada en vigencia de la Agenda 21– señalan la necesidad de compatibilizar el desarrollo con la explotación sustentable de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. El estilo de modernización salvaje, con claros signos de colapso de los recursos naturales y depredación de la vida humana expresada en un aumento de la violencia en las relaciones sociales, debe ser reemplazado por un nuevo estilo de desarrollo que asegure la reproducción de la naturaleza y la vida de las generaciones venideras.

Malestar social y pobreza

El malestar social atraviesa a la sociedad chilena. La desigual distribución del ingreso y, consecuentemente, los altos niveles de pobreza e inseguridad constituyen la explicación de fondo de este malestar. Según datos oficiales y gracias a un fuerte incremento del gasto social, la pobreza disminuyó de un 45,1% en 1987 a un 23,2% en 1996 (encuesta Casen, Mideplan). Paradójicamente, la desigual distribución del ingreso se mantiene invariable. En efecto, en 1987 el decil más pobre (10% de los hogares) percibía el 1,5% del ingreso nacional, mientras que en 1996 descendió a 1,4%; por su parte, en 1987 el decil más rico percibía 41,3% del ingreso nacional, manteniendo idéntico porcentaje en 1996 (PNUD 1998, p. 50). Los resultados de la Encuesta Casen 1998 indican que ese año la pobreza solo disminuyó 1,5%, alcanzando 21,7% (3.160.100 personas), mientras que la indigencia aumentó levemente a 5,6% (820.000 personas). Por otro lado, la distribución del ingreso se mantuvo estable desde 1990: el 20% más rico percibe 15,5 veces lo que recibe el 20% más pobre. Estos datos ponen en entredicho las políticas sociales del

Gobierno, respecto de que en dos años (1996-1998) solo fue posible que 128.000 personas salieran de la pobreza, mientras que la indigencia se incrementó en 7.200 personas. La dimensión actual de la pobreza, así como su estancamiento y crecimiento posibles durante 1999, como consecuencia de la recesión económica, la mantienen como uno de los problemas sociales más relevantes. La insatisfacción social fue constatada en el estudio realizado por el PNUD, que provocó gran revuelo al sostener que «un difuso malestar recorre Chile», por la inseguridad provocada por una «desigualdad en la distribución de oportunidades», especialmente en «educación y salud» (1998, pp. 214-222). Este estado de inseguridad y vulnerabilidad afecta especialmente a los pobres, pero también a los menos pobres (trabajadores) y a los sectores medios.

El gobierno chileno –así como otros gobiernos latinoamericanos– optó por implementar una política social focalizada en la superación de la pobreza, que otorga a los programas un carácter segmentado, parcial, desequilibrado y descoordinado, lo que implica desconocer o no asumir el carácter esencialmente heterogéneo y multidimensional de la pobreza, que exige respuestas integradas. Un ejemplo de ello lo constituye el apoyo insuficiente del Estado, en el ámbito productivo, en zonas de «extrema urgencia» (cuenca del carbón, en particular). Aquí, el dogma neoliberal de la «no-injerencia productiva» del Estado, contribuye a perpetuar la pobreza. Las zonas más «abandonadas» por el sector público –las áreas rurales– son las que presentan los mayores y persistentes índices de pobreza. Por otro lado, como lo subraya bien Raczynski (p. 259), «existe una yuxtaposición o adición de iniciativas, las que difícilmente madurarán en ausencia de otras iniciativas. La falta de articulación del Programa Entre Todos con otros programas del Fosis, y de éstos con los de los Municipios, es un ejemplo de esta situación». Raczynski recomienda:

Las nuevas características de la pobreza marcada por la diversidad de situaciones obligan a pensar en la adopción de políticas más diferenciadas (menos homogéneas) que en el pasado. La descentralización del aparato estatal y la multiplicación de agentes intermedios que actúan entre el Estado y la comunidad permiten definir las relaciones entre los sectores público y privado y hacen más viables los procesos de participación social, abriendo nuevas oportunidades de gestión de las políticas (p. 14).

Los gobiernos democráticos han aumentado significativamente el gasto social, logrando una disminución de los niveles de pobreza. Sin embargo, resultados recientes de la Encuesta Casen 1998 indican un claro estancamiento y estabilización de la indigencia. Este límite de la acción pública tiene sus causas en la enorme

desigualdad del ingreso, la precarización del mercado de trabajo, la estabilización de bolsones territoriales de pobreza y la falta de participación de los desposeídos basada en sus propias capacidades. Precisamente esta encuesta ha generado en el país un nuevo debate sobre la pertinencia de las políticas sociales y sus criterios de definición. Al respecto, la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza señala que el crecimiento económico no ha llegado a los más pobres, las políticas sociales se han agotado y sería necesario establecer un «mínimo social garantizado» (Baranda). El estancamiento de la pobreza obliga a redefinir las políticas sociales, apuntando a una solución integral que proporcione un piso social mínimo digno en el ámbito del trabajo, vivienda, educación, salud, recreación, ambiente y cultura.

Malestar político e imaginario democrático nacional-popular

En la sociedad posdictatorial prevalece el autoritarismo. Ello se manifiesta en las instituciones del Estado (senadores designados y vitalicios, Consejo de Seguridad Nacional, inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros); en la existencia de un sistema político binominal (no proporcional representativo) que permite a la oposición conservadora controlar el 50% de los cargos en el Parlamento con un tercio de los votos; y en la imposibilidad constitucional de convocar a plebiscito para dirimir conflictos políticos trascendentales. A ello se une el exceso de centralismo que ahoga las iniciativas de las regiones y comunas, no obstante la gravitación que adquieren en el proceso de globalización y en las demandas cotidianas de la ciudadanía.

Las transformaciones sufridas por el Estado como consecuencia de las políticas radicales de privatizaciones, ha limitado extremadamente sus funciones y su poder real en la sociedad. Tal debilitamiento no ha ido acompañado de un proceso de regulación que garantice los derechos de las personas y vele por el bien común. El poder irreflenable del capital privado prácticamente ha arrasado con la sociedad civil, mientras que los partidos políticos han visto disminuidas de manera considerable sus posibilidades de acción, transformándose en meros «reparadores» de las demasías del mercado, sin cuestionar el orden económico y social imperante y sin proponer nuevas formas equitativas y sustentables de convivencia social. La política ha perdido el encanto y parte importante de la población, en especial la joven, no cree ni en el poder transformador de la política ni en la de los partidos. Pero el autoritarismo no se limita a las instituciones. Está fuertemente arraigado en la cultura y en el modo de ser chilenos. Prevalece en la familia, la escuela, las universidades y el trabajo. La desconfianza existente en la sociedad alimenta y fortalece las jerarquías y el autoritarismo, bloqueando el desarrollo de la

individualidad, el subjetivismo y la ciudadanía plena. En el fondo, el autoritarismo desconfía de la capacidad del otro para aportar, crear y decidir soberanamente, considerando a los ciudadanos como menores de edad, desvalidos e incapacitados. Los partidos políticos aún no comprenden el clamor de la gente para que sea tomada en cuenta, como verdaderos ciudadanos. Los gobiernos de la Concertación declaran el derecho a participar, pero no lo practican. La reforma educacional apunta a crear niños y jóvenes más responsables, innovadores, solidarios y participativos, pero el autoritarismo domina aún las aulas y los gabinetes y oficinas de la burocracia estatal. Niños y jóvenes se desarrollan enormemente, en forma inteligente, pero el sistema educacional se mantiene en el pasado, a pesar de los programas reformistas. La conciencia ambiental crece en la población, sin embargo los proyectos y actividades económicas se imponen, en muchos casos, como hechos consumados, pasando por encima de los preceptos legales y de la voluntad de la gente. Existe un sentimiento generalizado de rechazo a los «poderes fácticos». El medio ambiente no es considerado seriamente en su dimensión ecológica y humana.

La participación no es compatible con la existencia de un mercado desregulado o de una sociedad de mercado, como últimamente se sostiene. La política neoliberal solo considera al individuo como consumidor, no como una persona con derechos plenos. La ciudadanía neoliberal, si es que existe algo que se pueda llamar así, se limita a comprar o vender(se). A los actores institucionales y empresariales les cuesta aceptar que otros, no ellos, puedan decidir por sí mismos. La falta de participación real en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía constituye un grave problema y un desafío de la sociedad chilena en el umbral del próximo milenio. Los chilenos quieren y aspiran a participar plenamente, sin demagogia ni subterfugios, sin engaños. Abrir camino a formas modernas de participación ciudadana real implica un cambio profundo en la cultura política autoritaria imperante en la sociedad, instituciones e individuos. El reclamo por participación ciudadana y justicia social, en realidad se entronca con el proyecto democrático, nacional y popular en tanto idea matriz inspiradora del ideal político-social del siglo XX (Garretón). Este proyecto histórico, interrumpido violentamente por la dictadura militar (1973-1989), aún se mantiene como ideario válido para importantes sectores de la sociedad chilena, en especial para aquellos que quedan fuera del proyecto modernizador neoliberal, que son muchos.

Ahora bien, el proyecto democrático no es populista, como en otros países latinoamericanos. En efecto, la democracia, el pluralismo político y cultural –no

obstante los extremismos de distinto signo que la negaron en determinadas coyunturas— ha estado presente en la vida política y cultural, simbolizando una especie de imaginario social generador de identidad nacional. El Estado industrializador y educador de los frentes populares, la reforma agraria y la promoción de la revolución en libertad democristiana, la nacionalización del cobre y la distribución del ingreso del socialismo democrático de Allende, constituyeron —más allá de las fuertes presiones sociales, políticas e internacionales que los acompañaron e incluso desbordaron— momentos históricos de materialización progresiva del proyecto democrático, nacional y popular de hacer país y ciudadanía.

Como es lógico, tal proyecto democrático nacional ha avanzado —y también retrocedido— por diferentes pendientes y vicisitudes, siendo impulsado, frenado o repelido por diferentes actores e instituciones. El progreso decimonónico y la ilustración liberal-burguesa, marxista (en su versión ortodoxa y crítica), socialcristiana y socialdemócrata, sirvieron de inspiración a los actores principales, provenientes sobre todo de las capas medias profesionales, intelectuales y trabajadores organizados. En todo caso la dictadura militar se inspiró e hizo retroceder el reloj de la historia en el Portales autoritario de comienzos de la República para realizar la «refundación de Chile». En efecto, el progreso y la democracia habían avanzado considerablemente en favor de los sectores populares y medios, por lo que la «transformación capitalista requería el disciplinamiento simultáneo de los asalariados y de los burgueses» (Moulian, p. 25). No obstante el «transformismo» del Chile actual, la producción de lo «nuevo» siempre se realiza en el campo de lo antiguo (p. 375).

En su interpretación reciente de la historia de Chile, Salazar/Pinto definen el proyecto nacional del siglo XIX como un proyecto de integración mercantil hacia afuera con fuerte diferenciación social hacia adentro, impuesto con violencia y represión. Entre 1930 y 1973 se impuso un proyecto de integración a lo interno, que había empezado a incubarse en el discurso económico «pipiolo» (1825-1873), más tarde en lo social (1885-1908), para alcanzar sus dimensiones sociopolíticas y culturales a comienzos del siglo XX (1908-1925). Para los autores, este proyecto es de carácter nacional-desarrollista, con fuerte intervención del Estado y expresiones de corporativismo social y populismo. La contradicción entre el discurso tecnocrático y estatista y las luchas por el poder de la baja sociedad civil (expresada en «cordones industriales», «comandos populares», «Asamblea del Pueblo», que tendían a sustituir instituciones estatales), hicieron fracasar el proyecto nacional de integración hacia adentro, dando lugar a la reimposición autoritaria del proyecto

neoliberal de integración hacia afuera. Por otra parte, los autores ven en la década de los 90 «la eclosión de una nueva etapa del insubmersible proyecto de 'integración hacia adentro'», impulsado por diferentes actores: el frente social ampliado de los derechos humanos (banderillas rojas), la masa de trabajadores, especialmente jóvenes, víctimas de la flexibilización del mercado laboral y «mercantilización» de la educación (banderillas negras del modelo neoliberal), y finalmente se encuentran los actores autónomos, de base, con un discurso trans-liberal (pp. 130-181).

El malestar político se engendró durante los 17 años de dictadura, pero ha perdurado en democracia, al verse frustrados, en la población menos privilegiada, los anhelos de democracia y justicia social no satisfechos por los gobiernos de la Concertación. Este malestar reivindica lo mejor del pasado frente a un presente equívoco, inseguro y carente de identidad nacional.

Hacia un nuevo proyecto democrático

¿Cómo sigue la historia? No se puede saber a ciencia cierta el rumbo que tomará el país. Sin embargo, todo indica que debido tanto a la naturaleza de los problemas existentes como a la dinámica y presión de las fuerzas sociales interesadas en el cambio, la sociedad chilena podría entrar progresivamente en un nuevo curso de desarrollo democrático, con características específicas, diferentes a las del pasado, pero entroncadas históricamente. Al parecer no es posible eliminar la sustancia ni las raíces históricas de un país. Cuando una sociedad se traza un camino estratégico y sus actores caminan por él, transformando y creando nuevas instituciones, anidando e impregnando la vida de valores y tradiciones culturales, no es posible refundarlo todo de nuevo, rehacer la sociedad como si fuese «terreno de nadie». La historia transcurre en un territorio geográfico específico y en medio de una comunidad humana peculiar, donde la interacción de ideas genera proyectos de vida económica, política, social y cultural. En este hábitat territorial y espiritual se incuba y desarrolla un imaginario social ideal de sociedad, una representación colectiva de la convivencia humana. Este imaginario crece y se despliega lentamente, conforme maduran las interacciones y las ideas se transforman en proyectos de nación. No se trata aquí de una teoría que defienda el determinismo o la inmanencia de los procesos históricos.

Hay momentos en que la historia de una sociedad explota por los límites, saliéndose del «marco» querido y buscado por sus actores principales. Hay momentos de conflictos agudos y desestabilizaciones generales o crisis, difíciles de superar, momentos en que uno o varios actores se salen del libreto, tiran por la

borda el proyecto de sociedad nacional y golpean a sus rivales para disciplinarlos y someterlos, por cualquier medio, a su voluntad de poder. Esos momentos son de dictaduras, en los que desaparece la democracia y desaparecen también físicamente sus sostenedores sociales. Pero luego se les busca, la sociedad los reclama, porque constituyen su memoria histórica, su sentido, su ser, su razón de ser. Entonces entra a esta sociedad un nuevo elemento que la enriquece: los derechos humanos empiezan a formar parte del nuevo proyecto. Ya no se puede prescindir más de estos derechos, no se les puede violar. Y éstos traen a otros derechos, con lo que el proyecto de sociedad se transforma, se perfecciona, se hace más completo.

Esto está pasando en Chile. Hace 10 años, al retornar la democracia, las fuerzas conservadoras no reconocían la violación a los derechos humanos, hablaban de los «presuntos desaparecidos», mientras que hoy, a mediados de 1999 se reconoce la existencia de desaparecidos y se reconoce que constituyen un problema central de la reconciliación nacional, aunque aún no se haga mucho por ubicar su paradero ni castigar a los culpables. Sin duda que la detención de Pinochet en Inglaterra ha contribuido a generar este nuevo clima y conciencia favorables respecto a la necesidad de respetar los derechos humanos, que forman parte del patrimonio de la civilización moderna. Ni las leyes de amnistía ni el silencio o arrogancia de los victimarios logra acallar el reclamo de justicia. Por el contrario, a 26 años del golpe militar crece en los chilenos el rechazo a los horrores del pasado y el deseo de su esclarecimiento definitivo; de lo contrario no habrá reconciliación nacional.

Mejorar sustancialmente la calidad de la educación y los servicios de salud, constituyen dos exigencias fundamentales de la mayoría de los chilenos. La educación y salud públicas forman parte del proyecto histórico de democratización, iniciado en la década de los 30 del presente siglo. Por lo tanto, su demanda implica retomar el viejo curso de la historia del proyecto de integración hacia adentro. Existe una gran insatisfacción con el sistema privado de salud que no brinda adecuada cobertura a los problemas de la población. Las Isapres son percibidas por los usuarios como simples negocios privados. La reforma de la educación se ve como necesaria, pero aún insuficiente en relación con los recursos y la calidad que se ofrece tanto en los establecimientos municipales como privados. Todo el mundo, incluido el gobierno de Frei, está conciente de las deficiencias de ambos sistemas y quedan planteados como un problema central de justicia social y calidad de vida para ser abordado por el próximo gobierno democrático. La participación ciudadana es otro clamor fundamental del nuevo proyecto nacional de desarrollo en germen. En el pasado, la participación era solo corporativa, es decir, era canalizada por los partidos populares y por las organizaciones sociales

(sindicatos, gremios, organizaciones de pobladores, etc.). En la actualidad, los procesos de individualización y la mercantilización de las relaciones sociales, han debilitado considerablemente las organizaciones tradicionales, dejando al ciudadano más solo frente al poder del mercado y de las instituciones. El individuo empieza progresivamente a tomar conciencia de sus derechos y a exigir su respeto. Por lo tanto, la participación de la gente ya no se canaliza ni por el Estado ni por los partidos, escasamente por los gremios y asociaciones, mucho más por los ciudadanos mismos y por las redes en que los individuos intervienen. La mera participación electoral («cada individuo un voto») no es suficiente y se exigen formas plebiscitarias, consultas ciudadanas e implicancia concreta en las decisiones del ámbito político, laboral, ambiental, económico, cultural o social. En este sentido, se puede hablar de una modernización de la comprensión sobre las definiciones más avanzadas de participación ciudadana.

La multiculturalidad o la diversidad cultural empiezan lentamente a ingresar al discurso del progresismo chileno. Las luchas de los mapuches por tierras, reconocimiento constitucional, respeto cultural y autonomía, han movilizado la conciencia de muchos chilenos que muestran simpatías por un pueblo que se resiste a las privatizaciones y a la arrogancia de los grandes empresarios nacionales y multinacionales que los amenazan –vía realización de megaproyectos en sus territorios– en su existencia misma como etnia. Aspiran, ancestralmente, a ser integrados desde la diversidad cultural, respetados como pueblo con capacidad de decidir sobre sus propios asuntos. El pueblo mapuche no solo existe en las comunidades del Alto Bio-Bío o en Arauco, sino que forma parte de la sociedad chilena mestiza, que aún se resiste a reconocer su propia identidad cultural híbrida. Su reconocimiento –y el de todas las minorías étnicas que viven en el país– no solo implicará saldar una deuda histórica, sino que al mismo tiempo significará un enriquecimiento del conjunto de la sociedad al asumir sus concepciones respetuosas de la naturaleza y de las relaciones sociales basadas en la cooperación. En los últimos 10 años han surgido de las comunidades indígenas nuevas voces inspiradas en sus tradiciones culturales e instituciones. De no ser atendidas correctamente sus exigencias, existe el peligro de que estas voces se sigan radicalizando, transformándose en un polo de conflictividad que puede tornarse aun más explosivo y desestabilizador. El cuidado del medio ambiente es otro tema que atraviesa transversalmente a la sociedad. Poco a poco crece la conciencia ambiental. La lucha por los espacios territoriales, por la conservación de las áreas verdes, por mejorar la calidad de vida, por superar los graves problemas de contaminación del suelo, aire, agua, alimentos, producidos por materiales de

construcción, vertederos y residuos industriales tóxicos, que afectan la salud, especialmente de los más vulnerables (niños, ancianos, pobres), toma cada vez más centralidad en la preocupación y en las movilizaciones de los chilenos. Es un aspecto que recién se agrega a la configuración de un nuevo proyecto democrático y nacional en ciernes. El medio ambiente seguirá creciendo en importancia, seguirá gravitando en los futuros conflictos sociales y políticos, por lo que ya constituye un factor que no puede ser ignorado por la acción económica ni política.

¿Pero qué queda del Estado nacional?, ¿qué de la comunidad nacional?; ¿cuánto de Estado y de comunidad tendrá el nuevo proyecto democrático? La globalización de la economía y las privatizaciones han debilitado considerablemente al Estado y la comunidad. En este sentido, resulta difícil hacer retroceder la rueda de la historia. Incluso, hay quienes piensan que aún «se puede reducir el Estado y eso implica no solo privatizar, sino racionalizar, disminuir ministerios y vincular el gasto a mayor productividad ...» (Correa). La opinión de este destacado ex-ministro socialista del gobierno de Aylwin contrasta con la realidad que vive el país, más con la realidad dramática de la crisis energética vivida y provocada por la falta de regulación estatal y la irresponsabilidad de los privados soberanos. En la actualidad vivimos un dilema mucho más profundo: consiste en saber o no si seremos meros «remeros de las galeras» de la modernización globalizada (Touraine, pp. 201-202), o actores respetados con posibilidades de incidencia, al menos en nuestros asuntos locales, regionales y nacionales. Castells, a su paso por Chile, lo decía en términos similares: «Llega el 2000: los países menos desarrollados tienen la gran oportunidad de dar el salto hacia la modernidad o de ser 'colonizados' definitivamente por otros más avanzados».

No podemos volver atrás, pero para seguir hacia adelante, para no terminar por ser «colonizados» o declarados «inviabiles» como pueblo, necesitamos cristalizar un nuevo proyecto democrático con un Estado regulador, distribuidor de equidad y moderno. Necesitamos agregar valor a nuestros recursos, protegerlos ambientalmente y elevar de manera significativa la calidad de vida de los chilenos y su injerencia real en los asuntos que les conciernen. La renovación del proyecto histórico pasa ahora, a fines de milenio, por la distribución del poder, la riqueza, la cultura y la igualdad de los ciudadanos, especialmente los más despojados y excluidos. La distribución del poder pasa por desarrollar las regiones y, por lo tanto, descentralizar el aparato estatal. La solución no es seguir privatizando el Estado, sino descentralizarlo, fortaleciendo el desarrollo autónomo de las regiones y localidades. La elección democrática de las autoridades regionales (en nuestro caso, intendentes), así como el robustecimiento de las comunas, hará posible un

mayor equilibrio de la preocupación de los partidos políticos por los problemas regionales y nacionales, impidiendo que el centro se desarrolle a costa del subdesarrollo de la provincia, como actualmente sucede. El centralismo ahoga a las regiones, polariza al país y alimenta resentimientos que pueden tener consecuencias fatales, como ocurre en Chiapas. De allí la necesidad de propender a un desarrollo más armónico entre Santiago, que concentra el capital y los mejores índices de progreso y bienestar, y las regiones, que aparecen como simples proveedoras y se mantienen en la postergación, pobreza y subordinación política. Chile ha constituido para el mundo subdesarrollado, especialmente América Latina, un modelo de saneamiento de la economía, de estabilización y de inserción internacional. Un ejemplo de índices macro. Ahora, de cara al próximo milenio, debería transformarse en un paradigma de desarrollo económico, social y cultural con democracia participativa, justicia distributiva y sustentabilidad ambiental.

Bibliografía

- Baranda, Benito: «Presidente de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza» en *El Mercurio*, 16/6/99, Santiago.
- Castells, Manuel: «La cuestión social» en *El Mercurio*, 20/6/99, Santiago.
- Correa, Enrique: «Es posible reducir el Estado que tenemos» en *El Mercurio*, 18/7/99, Santiago.
- Encuesta Casen 1998, Mideplan, Santiago.
- INE: «Encuesta Instituto Nacional de Estadísticas» en *El Mercurio*, 28/8/1999.
- OIT: *Chile. Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social*, Santiago, 1998.
- Garretón, Manuel Antonio: «Un proyecto democrático, nacional y popular» en *El Mercurio*, 29/8/99, Santiago.
- Moulian, Tomás: *Chile actual. Anatomía de un mito*, LOM, Santiago, 1997.
- PNUD: *Desarrollo Humano en Chile 1998*, PNUD, Santiago, 1998.
- PNUD: *Informe sobre Desarrollo Humano 1998*, Mundi-Prensa, Madrid, 1998.
- Rojas Hernández, Jorge: «Sociedad dualizada. Éxito económico, pobreza, malestar, violencia y movilizaciones sociales» en *Sociedad Hoy*, 1997, Universidad de Concepción.
- Salazar, Gabriel y Julio Pinto: *Historia contemporánea de Chile. Estado, legitimidad, ciudadanía*, LOM, Santiago, 1999.
- Tironi, Eugenio: «La irrupción de las masas y el malestar de las elites», Grijalbo, Santiago, 1999.
- Touraine, Alain: *¿Podremos vivir juntos? El destino del hombre en la aldea global*, FCE, Buenos Aires, 1997.

Jorge Rojas Hernández: profesor investigador de la Universidad de Concepción, Chile.

Palabras clave: democracia, Estado, modernización, Chile.